

vos a partir de 1981) y una de índole política (frente a la cual indican que sus impactos han sido mínimos y discontinuos, en tanto el sistema corporativo ha resistido y disuelto, aunque con ciertos trabajos, tales efervescencias de inconformidad social).

Sin embargo, esta cuestión deja abierta dudas que ellos mismos rescatan respecto de hasta dónde pueden llegar esos límites de control y tolerancia, dado el resquebrajamiento de legitimidad que priva sobre instituciones y prácticas políticas; ante un aumento paulatino del autoritarismo estatal expresado en desplazamientos reales sobre el respeto de las reglas y actores tradicionales; pero sobre todo, al evidenciarse un cierre al reformismo, particularmente el vinculado a los procesos electorales que habían facilitado espacios para el crecimiento de una oposición que, por ese mismo crecimiento, así como por la erosión gubernamental, comienza a encontrar canales autónomos de salida y cambio mediante los propios comicios, rebasándose por ende, las propias estimaciones que intuían una lenta instrumentación y cuyos resultados debían generar para el sistema mismo, condiciones tendientes a la reducción de las tensiones y no al acrecentamiento de éstas.

Ahora bien, entre todos los autores persiste una imagen de que el reformismo populista truncado en estos años, muestra sin lugar a dudas que como tal, la lucha interna de poder se ha impuesto a las posibilidades hipotéticas de que algún partido de oposición pudiera arrebatarle un triunfo total al poder constituido. Loeza y Segovia indican que tal fracaso



La vida política mexicana en la crisis.

Loeza, Soledad;
Segovia, Rafael. (comps.)

México. El Colegio de México. 1987.
184 pp.

El conjunto de trabajos que han sido recopilados en el volumen que aquí comentamos reúnen como factor de polémica común, discutir cuál y quiénes son los principales factores y beneficiarios que han arrastrado consigo los escenarios de crisis económica y de recomposición política durante las últimas administraciones gubernamentales habidas en México.

Lo anterior se desprende al cotejar la visión expuesta por los compiladores de la obra, cuando ubican una separación tajante entre una crisis nítidamente económica (que reconocen con rasgos definiti-

oposicionista se deriva del estrecho compromiso histórico que los compromete a respetar las reglas políticas establecidas desde el poder estatal, basado en permitir cambios sólo mediante triunfos electorales contundentes, o en otro de los casos a través de la introducción de enmiendas a la legislación, que hasta ahora poco capaces han sido de ir al rescate de esa credibilidad política en peligro. Las elecciones en lo particular, se han convertido en un termómetro significativo respecto a cómo tratar de superár al sistema, pero sobre todo, de que éste reconozca tales cambios a fin de fortalecer un intento de lógica democrática, aunque ello diste mucho de ser real.

Por ello, Rafael Segovia especifica en su contribución, la débil vocación oposicionista para tratar de protagonizar a nivel nacional, transformaciones a través de la propia vía electoral, dado que gobierno y sociedad la habían desdeñado notablemente por considerarla como un mero formalismo de funcionamiento burocrático, cuando no plenamente fraudulento. Segovia adicionalmente enfatiza que el nivel de crisis política se circunscribe a movimientos locales, pero reconociendo a la vez, que poseen capacidad para desembocar en movimientos nacionales; o como efecto contrario, los ubiquemos dentro del contexto de que los cambios pudieran provenir desde el centro presidencial; modificaciones que ayudarían a derrotar al enemigo adicional del abstencionismo. Estos factores determinan en grado sumo, los obstáculos que viene afrontando el PRI para seguir ganando las elecciones sin objeciones de fondo por parte

de la oposición. Entre ellas pueden precisarse:

- a) Menor oportunidad de cooptación de personal político capacitado para las tareas partidarias entre la propia clase gobernante, como desde los partidos de oposición.
- b) La imposibilidad de borrar la vinculación de lo que fue emprendido por administraciones anteriores.
- c) Falta de contactos permanentes para lograr una cooperación voluntaria de líderes de la sociedad civil y los grupos económicos con los proyectos del PRI y del gobierno.

Por último, Segovia entreve que no existen modificaciones significativas para todo el personal intelectual asociado con la ideología del sistema, en tanto su compromiso es de carácter tácito y por tanto de tipo inestable; pero sobre todo, destaca que la disgregación de las izquierdas y las derechas partidarias hacen caer cualquier esfuerzo estatal por apelar hacia una política de unidad nacionalista, que usualmente ha empleado el sistema cuando ha visto la necesidad de identificar un crisis bajo factores exógenos.

Por tal razón, la esclerosis del sistema electoral de carácter "no competitivo y pluripartidista", como lo describe Juan Molinar en su artículo, no puede seguir ofreciendo como únicas opciones la rearticulación de simples otorgamientos de registros o de un mayor número de diputados, sino que debe enfrentarse la necesidad de partidos fuertes y orgánicos, so riesgo de repetir situaciones como la de 1976, en la que la oposición legalizada de entonces no pudo, por

la misma debilidad en que lo sumía la legislación electoral, postular candidatos presidenciales contra el PRI.

Asimismo, Molinar detecta un ciclo más o menos péndular con referencia a que en una primera etapa, todas las reformas electorales interpuestas para mejorar la legislación se expresaron en dos periodos: el primero que va desde 1946 a 1963, de cuya aplicación se concluye la consolidación de un presidencialismo intocado y con prerrogativas que se impone al partido oficial y las centrales obreras que lo componen. La segunda fase arranca desde 1963 y llega a 1973, etapa caracterizada por los esfuerzos de proporcionar mayor legitimidad al sistema frente a la sociedad, así como de enfrentar los cambios bruscos producidos en la economía internacional.

Molinar apunta que después de estas fechas, las reformas electorales han permitido el incremento de las convergencias políticas de grupos sociales, partidos y sindicatos, que identifican como elemento aglutinador una posición anti-PRI y antisistema, concibiéndolos como un medio que les ha facilitado conocer e impugnar las violaciones y fraudes que se efectúan al margen o bajo un pretendido cumplimiento de los ordenamientos jurídicos derivados de la propia legislación electoral.

De la pérdida de confianza en los mecanismos del sistema, Carlos Arriola arma el ensayo más polémico desde el punto de vista conservadorista. Arriola parte de que la crisis de la institución presidencial desde los años setenta, ha puesto en serio predicamento a las bases ideológicas del sistema, en lo concer-

niente a avalar la legalidad existente, así como consolidar una correcta aplicabilidad de las funciones públicas.

Por ello, los sectores conservadores (empresarios, el clero y un cierto segmento de clases medias urbanas de provincia) que dudan sobre este aspecto de la vida política han transformado su intranquilidad en prácticas de oposición, bajo una idea civilista de recuperar y defender por sí mismos, los privilegios históricos que han gozado, no obstante que la administración De la Madrid ha procurado durante todo su sexenio revertir tal distanciamiento, mediante el establecimiento de reglas de juego más liberales y más acordes con sus expectativas.

Sin duda la adopción de este nuevo estilo de concertación refleja un hecho fehaciente: la disolución interna de las instituciones del sistema, cuya regeneración debe buscarse en otras fuentes, en tanto que han variado las rutas de incorporación y ascensos políticos. Luis Javier Garrido, al exponer el vacío militante del PRI, revela que éste es un partido de intereses, sin ideario y en la actualidad, demasiado disperso en su composición de fuerzas, lo cual es paradójicamente disfuncional para el estilo gubernamental de cambio conservador y anti-populista. La ambigua ubicación de un electorado forzado y cautivo por el encuadramiento corporativo a través de centrales y sindicatos, no dan indicio alguno acerca de las posibilidades que pueda seguir teniendo el sistema, pero sobre todo el PRI, para resistir el ascenso opositor en múltiples zonas del país. Garrido menciona que la didencia interna se incorpora a lo

anterior expuesto debido a que también han disminuido la capacidad de mecanismos como la labor de gestoría y la imposibilidad de efectuar una política de afiliación individual para afianzar una presencia real entre las bases militantes.

En esta línea de suponer que es el propio sistema quien ha prohiado sus propias contradicciones, Soledad Loeza analiza el embate electoral del PAN, del cual define que su ascenso se expresa únicamente allí donde se han agravado los errores de ejercicio gubernamental, más no como producto de una continuidad de prácticas que se hayan desdoblado hacia otra clase de actos más permanentes de desobediencia civil. Loeza explica que el PAN, por su ya larga trayectoria y permanencia en las lides electorales, así como su relativa autonomía organizativa, constituye una referencia distinta que capta ese sentimiento de oposición. Pero pese a este hecho, para Loeza el PAN ha avanzado muy poco en la incorporación de verdaderos núcleos militantes que se encuentren ubicados fuera de las clases medias, empresarios y la iglesia. Otro factor de inhibición es la división programática interna que prevalece entre los grupos practicantes de una ideología democrata-cristiana, frente a los simpatizantes neoliberales. Esta confrontación, sin embargo, viene esclareciendo algunos puntos coincidentes que son los que se han puesto en acción durante sus campañas: restitución de los derechos políticos al clero; búsqueda de apoyos en la prensa estadounidense para denunciar fraudes y represión; rechazo al centralismo presidencial; reforma a la política educativa; emprender

una política exterior menos activa en Centroamérica, y de menor agresividad frente a Estados Unidos.

Evidentemente, las demandas por una mayor democratización no sólo cruzan al elemento electoral como su vertiente más inmediata. También la reestructuración de las instituciones locales tendrá mucho que ver en el corto y largo plazo. Los gobernadores y los presidentes municipales son precisamente los factores que han protagonizado esta prolongada lucha alternativa de estiras y aflojas. Los tres últimos artículos que componen este texto aterrizan más específicamente en la historia de la oposición regional.

En primer término, Carlos Martínez Assad y Alvaro Arreola muestran la importancia estratégica de las gubernaturas, que al contrario de lo acontecido por las diversas reformas electorales, es una institución que nunca ha sido tocada, revelando así el personalismo y control directo que el poder central y el presidencialismo que hacen de ésta una prolongación del control político que se concentra en la autoridad real del sistema.

En tiempos recientes, la tendencia al imposicionismo ha acelerado las pugnas directas con las oligarquías y cacicazgos locales que se ven afectados por tales decisiones. Esto, si bien era una de las causales menos comunes en la caída de un gobernador, en los hechos se ha convertido en un factor de inestabilidad permanente no sólo en las regiones que los reciben, sino para el propio poder federal que le apoya. Sin duda es un claro ejemplo de la práctica de desmovilidad y desarraigo que cunde dentro del sistema y el partido oficial en su conjunto.

Simultáneamente, Martínez Asad y Arreola exploran en la historia, y señalan contra lo que pudiera suponerse, una tipología estrecha de causas para prescindir de un gobernador. Entre éstas se encuentran:

- a) No someterse a la línea burocrático-administrativa impuesta desde el centro (léanse secretarios de Estado y el presidente).
- b) No tener nexos directos con el presidente en turno cuando el gobernador es una "herencia política" de la transición sexenal.
- c) No poder ser factor de control y decisión entre los grupos locales de la entidad para mantener sus capacidades de disciplina y lealtad al sistema.

En síntesis, los autores concluyen su artículo precisando siete factores de urgente resolución para la democratización efectiva de la política regional: romper la resistencia de los viejos esquemas de designación; superar la centralización presidencialista; fortalecer avances para lograr un parlamentarismo local; reconocer los avances pluripartidistas en las regiones; por último, intervenir más decididamente en la eliminación de los cacicazgos, para coadyuvar en los esfuerzos tendientes a vitalizar la reforma municipal y la democracia general del sistema.

El libro culmina con los artículos de Enrique Márquez y de Marco Antonio Bernal. El primero relaciona la evolución política del movimiento navista en San Luis Potosí entre 1958 y 1985; el segundo refiere al caso del movimiento panista en Ciudad Juárez en las elecciones municipales de

1982 y 1985. De ellos, como comentario sucinto, pueden extraerse algunas ideas de rica discusión y crítica:

- a) Por su ubicación geográfica, la "rebelión norteña" nos indica un opositorismo de derecha que se expresa bajo dos modalidades: una que se estructura en contra de un caciazgo personal (el navismo potosino que lucha en 1958 contra Gonzalo N. Santos y en 1983 contra Carlos Jonguitud), o contra uno de tipo moderno como lo es el obstruccionismo federal para el libre desarrollo de la industria maquiladora fronteriza.
- b) De hecho, las experiencias norteñas indican una renovación de las aspiraciones por revitalizar una democracia burguesa, en el sentido de que se elimine cualquier vestigio demagógico-populista, imponiendo una política de modernización y liberalidad económicas.
- c) Sin embargo, el desgaste y la capacidad impositiva del régimen, pese a un uso ocasional de la violencia para evitar el avance de tales movimientos, parece estar diluyéndose en tanto se van encontrando los medios de desactivación y negociación con los grupos desidentes, al incorporarlos en puestos de gobierno, por lo que puede preverse que el fraude electoral ya no será tan necesario, aunque sí será un instrumento latente y de nueva cuenta detonador de inconformidades sociales en caso de no avanzarse en la legitimidad mediante triunfos claros.

Para terminar este comentario, cabría decir que *La vida política*

mexicana en la crisis expresa con mucha fidelidad el escepticismo, pero también la aspiración de cambios; propone con gran insistencia, recorrer analíticamente los aspectos oscuros de una democracia exigua y decadente. Ante ésto, el contenido del propio libro da un méntis a sus compiladores: no es necesario que la

crisis política se exprese bajo convulsiones irreversibles. También existe la posibilidad de que esta prolongada incertidumbre sea más devastadora en el ánimo de nuestra nación.

Víctor Alarcón Olgún.

Estudios Políticos/CIDE.